

Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintidós.

Vistos:

El Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro, en causa RIT N° 42-2021 y RUC 2010029261-1, por sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno, condenó a MAURICIO FERNANDO MONTIEL CHIGUAY, a la pena de diez años y un día de presidio mayor en su grado medio, más accesorias legales, como autor del delito frustrado de femicidio, previsto y sancionado en el artículo 390 bis del Código Penal, cometido el 6 de junio de 2020, en la comuna de Castro, en la persona de María Magdalena Andrade Guinao.

Los hechos establecidos en el considerando 9° de dicha sentencia y que se califican como delito frustrado de femicidio, son los siguientes: *“El día 06 de Junio de 2020, alrededor de las 23:40 horas, la víctima doña María Magdalena Andrade Guinao, se encontraba en su domicilio ubicado en calle Gabriel González Videla N° 1836 de Castro, instantes en que se produce una discusión con su cónyuge el imputado MAURICIO FERNANDO MONTIEL CHIGUAY, el cual la agrede con un arma blanca con la intención de causar su muerte, propinándole cinco estocadas en tórax, abdomen, manos y pierna, debido a lo cual resultó con “heridas corto punzante en epigastrio, y mesogastrio de 3 y 4 centímetros respectivamente, herida en hipocondrio izquierdo penetrante con exposición de epiplón mayor sangrante de 5 centímetros, múltiples lesiones transfixiantes, en asas delgadas de más de 50%, además de lesión renal grado 3 en riñón izquierdo, herida cortante en palma de mano izquierda de 5 centímetros y cara posterior de antebrazo de 2 centímetros, herida en cara lateral de muslo izquierdo de 3 centímetros”, lesiones de carácter grave con riesgo vital, con un tiempo de recuperación de 35 a 40 días, con igual período de incapacidad, que de no mediar atención médica oportuna le habrían causado la muerte.”*



La defensa del acusado dedujo recurso de nulidad contra dicha sentencia, el que fue admitido a tramitación, celebrándose la audiencia para su conocimiento el día 3 de los corrientes.

Y considerando:

1º) Que el recurso deducido se sustenta en la causal de la letra a) del artículo 373 del Código Procesal Penal, en relación a los artículos 5, inciso 2º y 19 N° 3, inciso 5º (*sic.*) de la Constitución Política de la República, 11.1 de la Declaración Universal de Derechos Humanos, 14.3 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos, 8 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos y 36, 83, 205, 206, 220, 314, 316, 329 y 331 del Código Procesal Penal, denunciando las infracciones que se examinarán a continuación y pidiendo en definitiva que se anule el juicio y la sentencia y que el procedimiento se retrotraiga hasta la realización de una nueva audiencia de preparación del juicio oral ante el Tribunal de Garantía no inhabilitado, donde se proceda conforme a derecho, para que posteriormente el tribunal oral no inhabilitado que corresponda, disponga la realización de un nuevo juicio oral en que se conozcan y fallen los hechos materia de acusación.

2º) Que en un primer orden, denuncia el recurso que las declaraciones de la víctima y un testigo presencial fueron introducidas al juicio a través de un testigo de oídas, lo que impide a la defensa contrainterrogar a aquéllas, vulnerando el derecho al debido proceso y el principio de contradicción.

Esta alegación debe ser desestimada desde que el artículo 295 del Código Procesal Penal consagra la libertad de prueba, señalando que todos los hechos y circunstancias pertinentes para la adecuada solución del caso sometido a enjuiciamiento podrán ser probados "*por cualquier medio producido e incorporado en conformidad a la ley*" y el artículo 309 del mismo código declara primero, que



en el procedimiento penal no existen testigos inhábiles y, luego, reconoce la admisibilidad de los llamados testigos de oídas, al indicar que todo testigo dará razón circunstanciada de los hechos sobre los cuales declarar, expresando si los hubiere presenciado, si los dedujere de antecedentes que le fueren conocidos “o *si los hubiere oído referir a otras personas*”.

Sin perjuicio de lo anterior, siendo los testigos de oídas un medio probatorio admitido por nuestro ordenamiento procesal, la evidente menor calidad de esos testimonios al no poder ser contra examinados sobre puntos respecto de los cuales sólo el testigo directo puede responder, constituye un defecto que debe ser sopesado por los jueces en la valoración de esa prueba, valoración que en este caso no ha sido cuestionada mediante la causal correspondiente.

3º) Que protesta luego el recurrente porque el juzgado de garantía admitió prueba pericial ofrecida por el ministerio público sin acompañar los antecedentes sobre la idoneidad profesional del perito, entregando al fiscal la razón legal para prescindir de dichos antecedentes el propio juzgado de garantía, lo que además evidenciaría su falta de imparcialidad y afectaría el derecho al debido proceso del acusado.

Al respecto, que el juzgado de garantía haya estimado que el desempeñarse el perito en el Servicio Médico Legal constituye prueba suficiente de su idoneidad profesional -según se escuchó en los audios reproducidos en la audiencia ante esta Corte por el propio recurrente-, no puede constituir una infracción al debido proceso, menos aún si el recurso no ha mencionado elemento alguno para dudar de dicha idoneidad y, por ende, controvertir la corrección de tal decisión.

Asimismo, el haber mencionado el juzgado de garantía el artículo 321 del Código Procesal Penal, como parte de su argumentación para rechazar la solicitud



de antecedentes de idoneidad que efectuó la defensa, y que ello se haya llevado a cabo ante el silencio u olvido del fiscal de la misma disposición -fiscal que luego hace suyo tal argumento-, no puede considerarse como una actuación que importe la pérdida de imparcialidad del sentenciador, desde que su decisión o el fundamento de ésta no está supeditado a que el mismo fundamento sea aportado previamente por las partes y, por ende, el mero gesto de “cortesía” del juez de recordar el artículo olvidado por el fiscal no puede interpretarse como un intento de favorecerlo en el debate en curso.

Finalmente, no debe olvidarse que de conformidad al artículo 319 del Código Procesal Penal, la declaración de los peritos se rige supletoriamente por las reglas establecidas para los testigos, de manera que si el defensor del imputado quería postular la falta de idoneidad profesional del perito en cuestión ante el tribunal de juicio oral en lo penal, pudo durante el contraexamen, por aplicación supletoria del artículo 309 del mismo código, dirigirle preguntas tendientes a demostrar algún “*defecto de idoneidad*”, facultad que tampoco se probó haber hecho uso, lo que demuestra en último término, la falta de perjuicio y, por ende, de sustancialidad de la supuesta infracción cometida por el juzgado de garantía.

4º) Que a continuación el arbitrio reprocha que se haya declarado admisible por el juzgado de garantía seis hojas de cuaderno correspondiente a cartas del imputado a familiares, lo que vulneraría en opinión del recurrente los derechos a la no autoincriminación, a la intimidad, privacidad y al debido proceso.

De la declaración de Carlos Saldivia, extractada en el N° 3 del considerando 6° del fallo (*“El imputado atentó contra su integridad física a causa de lo que estaba viviendo y lo que había hecho, dejando tres cartas en donde pide a los padres que lo perdonen, que va a recibir una condena y que ya perdió*



familia, trabajo y que lo perdonen por lo que iba a hacer, en otra a doña María Magdalena le pide disculpas y que cambie su actuar, él en esa carta aun piensa que doña María y doña Karina tenían una relación. A esta última en la carta le pide que cambie su actuar porque si ella cambiaba doña María también va a cambiar su forma de actuar”), y que constituye la única fuente que tiene esta Corte para conocer el contenido de esas cartas, se desprende que en éstas el imputado únicamente pide disculpas a los familiares destinatarios, pero no reconoce un hecho determinado, sin perjuicio que puede presumirse que se disculpa por una agresión a la víctima de autos.

Sin embargo, como consigna en el motivo 11° del fallo, en su alegato de apertura la defensa no discutió la existencia de la agresión ni la autoría del imputado, sino únicamente su calificación jurídica y el grado de desarrollo del delito, aspectos en los que las cartas no tienen ninguna aptitud para incidir en la decisión de los jueces.

Si bien, como también se menciona en el mismo considerando 11°, en el alegato de clausura la defensa esboza la teoría consistente en que la víctima se autoinflinge las lesiones, el tribunal, como explica en el mismo basamento, la descarta porque ningún medio probatorio se rindió para demostrarlo y en atención a la conteste declaración de los testigos sobre la participación del acusado.

De ese modo, la alegada infracción, incluso de ser efectiva, carece de toda influencia en lo dispositivo del fallo, requisito exigido por el artículo 375 del Código Procesal Penal, pues las referidas cartas no fueron consideradas por los jueces para formar su convicción condenatoria.

5°) Que, finalmente, en el arbitrio se reclama porque la fijación fotográfica del sitio del suceso, correspondiente al domicilio del imputado, se realiza por los policías momentos antes de que el tribunal autorizara el ingreso a ese lugar,



infracción que incluso de ser real no posee la sustancialidad que demanda la causal de nulidad esgrimida, si se tiene en cuenta que el imputado ya había sido detenido en la vía pública por estos hechos, que no consta que el inmueble estuviere cerrado al llegar los policías, que el permiso para el ingreso al domicilio ya estaba siendo solicitado por el fiscal al juez competente y, principalmente, que se trata precisamente de un sitio del suceso de un delito de femicidio, lo que hacía esperable un ingreso inmediato con el objeto de descartar que existieran otras víctimas en su interior que requirieran atención médica urgente y, además, porque correspondía, dado el carácter señalado, a un lugar que necesariamente debía ser cuidadosamente escrutado y registrado durante la investigación por los policías, de manera que, en ese contexto, el apresuramiento de los agentes carece de la entidad para considerarlo una infracción “sustancial” a una garantía fundamental del imputado.

6º) Que por todas las consideraciones anteriores, el recurso de nulidad será desestimado.

Y visto, además, lo prevenido en los artículos 373, 374, 377 y 384 del Código Procesal Penal, **se rechaza** el recurso de nulidad formalizado por la defensa de MAURICIO FERNANDO MONTIEL CHIGUAY, contra la sentencia de dieciocho de diciembre de dos mil veintiuno, dictada por el Tribunal de Juicio Oral en lo Penal de Castro, en causa RIT N° 42-2021 y RUC 2010029261-1, y contra el juicio que le precedió, los que, en definitiva, no son nulos.

Regístrese y devuélvase.

Redacción a cargo del Ministro Sr. Valderrama.

Rol N° 96.789-21.





Pronunciado por la Segunda Sala de la Corte Suprema integrada por los Ministros (as) Manuel Antonio Valderrama R., Jorge Dahm O., Leopoldo Andrés Llanos S., María Teresa De Jesús Letelier R. y Abogada Integrante Pía Verena Tavorari G. Santiago, veintitrés de junio de dos mil veintidós.

En Santiago, a veintitrés de junio de dos mil veintidós, se incluyó en el Estado Diario la resolución precedente.

